

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-11430-2023
CARATULADO : VARGAS/FISCO - CDE

Santiago, dos de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos.

Con fecha 07 de julio de 2023, folio 01, comparece don Nicolás Alberto Leal Sepúlveda y don Eduardo Armando García Ramos, abogados, domiciliados en calle Bandera N° 236, subterráneo, comuna de Santiago, en representación de **Emiliano Segundo Mancilla España**, pensionado, casado; **Marcelo Alejandro Mancilla Vargas**, pensionado, casado; **Joaquín Nelson Mancilla Vargas**, guardia, soltero; **Elena Bernardita Mancilla Vargas**, educadora, soltera; **Emiliano Gonzalo Mancilla Vargas**, guardia, casado; **Olga Bernardita Vargas Soto**, guardia, casado, todos con domicilio en calle Bandera N° 236, subterráneo, comuna de Santiago, quienes vienen en interponer demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado en contra del **Fisco de Chile**, representado legalmente por don Raúl Letelier Wartenberg, domiciliado en calle Agustinas N° 1225, piso 4º, comuna de Santiago, en base a las consideraciones de hecho y derecho que exponen.

Con fecha 21 de septiembre de 2023, folio 08, se notificó la demanda de conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

Con fecha 19 de octubre de 2023, folio 12, se tuvo por contestada la demanda, dentro del término legal, confiriéndose traslado para la réplica.

Con fecha 26 de octubre de 2023, folio 14, se tuvo por evacuado el trámite de la réplica, dentro del término legal, confiriéndose traslado para la dúplica.

Con fecha 08 de noviembre de 2023, folio 19, se tuvo por evacuado el trámite de dúplica, dentro del término legal. Acto seguido, se recibió la causa a prueba, estableciéndose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, allí señalados, resolución notificada a la parte demandante, por el estado diario, el día 21 de noviembre de 2023, folio 21; y a la parte demandada, por correo electrónico, el día 26 de junio de 2024, folio 28.

Con fecha 29 de julio de 2024, folio 45, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 07 de julio de 2023, folio 01, comparece don Nicolás Alberto Leal Sepúlveda y don Eduardo Armando García Ramos, abogados, en representación de don Emiliano Segundo Mancilla España; don Marcelo Alejandro Mancilla Vargas; don Joaquín Nelson Mancilla Vargas; doña Elena Bernardita Mancilla Vargas; don Emiliano Gonzalo Mancilla Vargas; y doña Olga Bernardita



Vargas Soto, quienes vienen en interponer demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado en contra del Fisco de Chile, todos debidamente individualizados, en base a las consideraciones de hecho y derecho que exponen.

Los hechos.

Señalan que don Emiliano Segundo Mancilla España se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, contemplada en la Ley N° 20.405, conocida como comisión Valech II, con el número 4926.

Disponen que por su parte, la demandante por repercusión doña Olga Bernardita Vargas Soto, es cónyuge del demandante principal. Luego, señalan que los demandantes don Marcelo Alejandro, don Joaquín Nelson, doña Elena Bernardita y don Emiliano Gonzalo, todos de apellidos Mancilla Vargas, son hijos del demandante.

Relato de los hechos:

Testimonio de don Emiliano Segundo Mancilla España.

En cuanto al testimonio de don Emiliano Segundo Mancilla España, dispone que nació el 29 de noviembre de 1951, viviendo actualmente en la ciudad de Puerto Montt. Indica que diciembre de 1974 tenía 25 años de edad y que trabajaba en una fábrica de carrocerías en Puerto Montt.

Señala que el 14 de diciembre de 1974, al salir del trabajo lo detuvieron los militares, junto a otros compañeros, para llevarlos a una Comisaría de Carabineros, quedando el vehículo en el cual se transportaban en la calle. Menciona que estuvo dos días en el calabozo totalmente incomunicado de su familia. Indica que siempre seguían a la gente que trabajaba en la fábrica, que nunca supo el por qué, pero a él y a varios compañeros constantemente los detenían Carabineros o militares.

Luego, detalla que el 16 de diciembre de 1974, lo trasladaron a la cárcel Chin Chin, manteniéndose incomunicado y torturado, sin comer y beber. Menciona que lo golpearon con la culata de un fusil, lo insultaron, le lanzaron agua, encontrándose mojado todos los días, con frío, vendado y encadenado. Señala que se sentía con rabia y pena por lo que estaba pasando. Indica que le pegaron en una costilla que lo mantuvo con malestares por varias semanas. Señala que estuvo detenido alrededor de diez días, que para él fueron una eternidad, en donde lo dejaban salir del calabozo durante una hora, con hambre, sed, y psicológicamente muy afectado. Menciona que en ese momento el tenía dos hijos y que su esposa se quedaba con ellos, la cual iba a la cárcel todos los días recibiendo insultos.

Relata que el día 23 de diciembre de 1974 salió en libertad, pero que se enfermó de los pulmones, recibiendo el diagnóstico de tuberculosis a consecuencia de estar en el calabozo por varios días, golpeado, encadenado, con los ojos vendados, por



lo que estuvo en tratamiento durante seis meses, debiendo ir al Cesfam para tomar alrededor de doce pastillas para curarse.

Dispone que él nunca había pasado por algo así, indicando que fueron vivencias duras. Recuerda que en las noches lloraba, pensando cosas trágicas, sin poder dormir por el miedo que sentía, siendo afectado psicológicamente. Menciona que cuando salía no podía ver un militar o un Carabinero por el miedo que sentía, señala que constantemente lo perseguían y lo discriminaban llamándolo comunista, sin haber sido militante de algún partido político.

Comenta que en esos años postuló a trabajos fiscales, como a la fuerza aérea donde no lo recibieron por ser un preso político, sintiendo que su vida se había arruinado. Señala que trabajó diez años en una caja de empleados particulares, donde su empleador solo lo inscribió, sin tener imposiciones, perdiendo todos esos años, afectando su pensión. Relata que trabajó de forma independiente, con trabajos esporádicos, sin poder ingresar a una empresa grande porque no lo recibían, ya que en ese momento Puerto Montt era una ciudad chica.

Señala que al no tener un trabajo estable su renta bajó considerablemente, debiendo irse a vivir a la casa de sus padres con su esposa e hijos, sintiéndose mal por no haber entregado estudios superiores a sus hijos, quienes solo completaron la enseñanza media, excepto su hija menor quien es profesional por haber pagado sus estudios trabajando.

Indica que su hijo mayor quiso entrar a Carabineros de Chile, quien hizo el curso, pero que cuando investigaron a la familia lo sacaron a consecuencia suya. Dispone que desde ese momento su hijo comenzó con una depresión severa, también indica que le diagnosticaron cáncer renal con metástasis en los pulmones, debiendo dializarse de por vida, con 52 años, habiéndose sometido a distintas cirugías y tratamientos.

En cuanto a su segundo hijo, refiere que hizo el servicio militar, se mantuvo por un tiempo, pero que por la misma razón que su hermano, lo despidieron. Señala que hace poco tiene un trabajo estable como guardia.

Respecto de su tercer hijo, comenta que estuvo en investigaciones en Puerto Montt, quien hizo la prueba y consiguió el segundo puntaje de la Décima Región. Señala que la familia hizo un esfuerzo para hacer trámites, distintos exámenes físicos y psicológicos que salieron buenos, pero que al final investigaron a la familia y que nuevamente por las detenciones su hijo quedó fuera, dándole depresión. Indica que su hijo comenzó a estudiar técnico en construcción, pero no terminó por asuntos económicos.

Señala que su hija menor se costó sola sus estudios como educadora diferencial, trabajando duramente para lograr sus objetivos.



Relata que toda su vida lamentó no poder optar por un trabajo estable, sintiendo rabia por todo lo sucedido en su juventud. Indica que el golpe militar arruinó su vida y el futuro de sus hijos, siendo algo irremediable. Comenta que todo lo que ha sucedido le trajo consecuencias en su estado de salud mental, comenzando a fumar y a beber alcohol, dejándolo tiempo después porque le traía consecuencias a sus pulmones.

Refiere que en el año 2020 su casa se quemó completamente, debiendo estar cinco o seis meses en el departamento de su hija, durmiendo hacinados. Señala que su padre cuando tenía 93 años, lo despertaba porque él tenía pesadillas y gritaba durante gran parte de la noche de forma desesperada. Comenta que sus estados de ánimos fluctúan, manteniendo distancia con Carabineros o militares para no recordar el pasado. Indica que estuvo con tratamiento psicológico que no fue efectivo, ya que las sesiones eran cada seis meses, sin tener los medios para atenderse de forma particular.

Señala que veinte días después del incendio, su padre falleció, sufriendo una descompensación por diabetes mellitus tipo 2, bajando su glicemia, subiendo la presión arterial, paralizando una parte del cuerpo, descartándose un accidente cerebro vascular. Menciona que a sus 71 años siente una pena profunda, que el daño causado a él y a su familia es irremediable, indicando que su salud física y emocional fueron devastadas, esperando que haya una reparación del daño causado.

Testimonio de Olga Bernardita Vargas Soto.

Dispone que nació el 11 de junio de 1949, teniendo actualmente 73 años, encontrándose casada con el sr. Emiliano Mancilla, viviendo en la ciudad de Puerto Montt.

Señala que cuando tomaron detenido a su esposo, ella tenía 27 años y tenían dos hijos pequeños. Recuerda que el 14 de diciembre de 1974 cuando su esposo no llegó a trabajar, le fueron a avisar que lo habían tomado detenido, asustándose mucho porque no habían pasado por esas cosas. Comenta que junto a su cuñada y su suegra fue a ver a su esposo, siendo horrible ver cómo lo golpeaban, encontrándose esposado como si fuese un criminal. Refiere que todos los días iba acompañada de su cuñada, a llevarle almuerzo o algo que necesitara, siendo el trayecto a la cárcel bastante largo, debiendo caminar kilómetros para poder llegar, transformándose en su rutina diaria. Indica que sus hijos los dejaba con su suegra, ocultando todo para que no la vieran llorar.

Relata que cada vez que iba a la cárcel se deprimía mucho por ver a toda la gente que estaba sufriendo, inspirando pena porque la gente no veía a su familia, señalando que muchos estaban incomunicados. Advierte que cuando sus hijos crecieron les comentó lo que habían vivido, dándose cuenta que ellos habían notado



algunas cosas desde pequeños. Recuerda que sus hijos vieron llegar a su padre un 23 de diciembre de 1974, alegrándose mucho.

Revela que sufrieron mucho como familia, pasando precariedades porque su esposo fue exonerado de sus funciones, sin encontrar trabajo, debiendo hacer trabajos pequeños, ayudándose con sus suegros pudieron dar un mejor pasar a sus hijos. Señala que fueron discriminados por los vecinos, sin que los miraran, pero que su familia siempre estuvo para apoyarlos.

Menciona que luego de salir de libertad, su esposo comenzó a tener varias repercusiones por haber estado detenido, costándole conciliar y mantener el sueño, despertándose por pesadillas, hablando y gritando mientras dormía, comenzando a tomar alcohol los fines de semana y fumar cigarrillos.

Piensa que las repercusiones físicas, emocionales y psicológicas perduran hasta hoy en día. Indica que hace poco tiempo su casa se quemó, y que luego falleció su suegro, afectando la salud mental de su esposo, cuidándolo, preocupándose de él.

Afirma que ella es de una familia de Carabineros, sin tomarle rencor al uniforme, tratando de inculcarle eso a sus hijos, sin embargo, espera una reparación por todo el daño causado a la familia.

Testimonio de Marcelo Alejandro Mancilla Vargas.

Refiere que nació el 12 de noviembre de 1969, teniendo actualmente 53 años, y que vive en la ciudad de Puerto Montt. Señala que cuando a su padre se lo llevaron detenido el 14 de diciembre de 1974, él tenía alrededor de 5 años, llamándole la atención que su padre no estuviera en su casa. Señala que estuvo alrededor de diez días ausente, y que según le comentaron fue puesto en libertad el 21 de diciembre del mismo año. Indica que él es el mayor de los hermanos, y que vio a su padre y madre muchas veces tristes, sin entender lo que sucedía, pero que sí se daba cuenta de esos sentimientos, lo que provocó que le diagnosticaran depresión siendo niño. Relata que cuando su madre y su tía iban a dejarle comida a su padre a la cárcel, él se quedaba con su abuela, por lo que la dinámica familiar cambiaba.

Expresa que a medida que iba creciendo, comenzó a realizar preguntas, donde le dieron mas información, haciéndole sentido todo lo que él recordaba cuando era niño, sin embargo, menciona que sus padres fueron cuidadosos en que sus hijos no se dieran cuenta de lo que pasaba.

Cuenta que cuando creció postuló a Carabineros de Chile, haciendo un curso por nueve meses, informándole a los pocos días de licenciarse que no podría continuar porque lo habían investigado, dándose cuenta que su padre era exonerado político. Producto de lo anterior, comenta que se sintió horrible, que su abuelo materno era parte de la institución, por lo que sintió frustración, rabia y pena, afectándole su salud mental, volviendo la depresión. Con posterioridad, señala que le



diagnosticaron cáncer renal, extirpándole un tumor y un riñón, teniendo metástasis en los pulmones, encontrándose actualmente en tratamiento, debiendo dializarse tres veces a la semana. Indica que ayudaba a su padre en el taller como desabollador de vehículos, pero que actualmente tiene una pensión de invalidez.

Declara que no siente rencor por las instituciones, pero si siente pena por lo que le sucedió a su padre, porque le truncaron sus sueños, su vida profesional y económica, repercutiendo en sus hijos. Señala que se siente discriminado, y que a la fecha ya se encontraría jubilado, con un buen grado y una buena pensión.

Indica que hoy en día tiene pesadillas, dificultades para conciliar y mantener el sueño por lo que debe tomar fármacos, además de seguir en tratamiento con psiquiatra y psicólogo. Espera una indemnización para la familia, por haber afectado a todos de distintas formas, frustrando sus sueños, sufriendo a nivel emocional y físico.

Testimonio de Joaquín Nelson Mancilla Vargas.

Informa que nació el 20 de marzo de 1977, de actuales 46 años, y que vive en la ciudad de Puerto Montt. Comenta que en la niñez nunca asimiló lo que pasaba en su familia, que si bien nunca faltó la comida o el abrigo, si faltó su padre más tiempo en casa. Recuerda que su padre nunca pudo encontrar trabajo estable por sus antecedentes, debiendo buscar trabajos esporádicos, llegando tarde en la noche. Señala que cuando llegaba su padre él ya se encontraba durmiendo. En cuanto a la salud, expone que solo tuvieron la pública, sin contar con previsión, por lo que los atendían para ciertas emergencias o cuando les debían hacer exámenes de forma particular.

Explica que a los 14 años le comentaron sobre la detención de su padre, el cual estuvo detenido por diez días, a partir del 14 diciembre de 1974, dejándolo en libertad el 23 de diciembre de 1974, asimilando todo lo que se tuvo que pasar, haciéndole sentido todo lo que habían vivido en la niñez.

Indica que se afectó la economía de su familia, pero que completó la enseñanza media. Señala que estudiar una carrera profesional era imposible, por lo que postuló a investigaciones, siendo el segundo mejor puntaje de la región, quedando seleccionado tercero de 300 personas, lo que significó un gasto extra, ya que se debían consultar médicos, hacer exámenes, viajar a la ciudad de Santiago, siendo un sacrificio familiar. Expone que luego se investigó a la familia, notando que su padre tenía antecedentes a consecuencia de la dictadura militar, por lo que no lo dejaron seguir con la postulación. Considera que ello le afectó, cuestionándose por mucho tiempo, sintiéndose frustrado, con rabia, por haber realizado un gasto innecesario, sufriendo trastorno del sueño.

Menciona que trabajó, y que luego quiso estudiar, matriculándose en un instituto en el cual duró dos años, desertando por temas económicos.



Da cuenta que le cuesta ver a su padre con diversas patologías producto de lo sufrido, señalando que no puede estar mucho tiempo solo porque comienza a llorar, despertándose en las noches por las pesadillas. Señala que cuando comenzó el estallido social trataron de que su padre no viera las noticias.

Considera que como familia tienen un daño emocional irremediable, pero estima que una reparación económica podría ayudar, sobre todo para sus padres que fueron los que más sufrieron.

Testimonio de Elena Bernardita Mancilla Vargas.

Indica que nació el 08 de octubre de 1982, de actuales 40 años y que vive en la ciudad de Puerto Montt. Refiere que en la época del golpe de Estado, ella no había nacido, y que se enteró de la situación que vivieron sus padres cuando ella ya era grande. Indica que supo que su hermano había postulado a investigaciones y que no quedó porque su padre era exonerado político, viendo a su hermano sufrir por eso.

Señala que a su padre siempre le costó hablar del tema, pero que le contaron que lo detuvieron un 14 de diciembre de 1974, estando en la cárcel hasta el 23 de diciembre del mismo año. Comenta que su madre le decía que sus hermanos mayores habían sufrido mucho porque eran pequeños, entendiendo porqué su padre nunca tuvo trabajo estable. Menciona que en alimentación nunca les faltó nada, siempre siendo apoyados por los abuelos paternos, viviendo en el mismo sitio que tienen sus padres ahora.

Informa que por temas económicos su padre la pudo tener hasta enseñanza media completa, debiendo trabajar y estudiar al mismo tiempo, obteniendo una carrera técnica y luego una superior, trabajando y estudiando. Revela que desde pequeños no tenían previsión, y que cuando uno de los hermanos se enfermaba, su padre hacía el esfuerzo de llevarlos a atención particular.

Considera que tiene repercusiones emocionales, en su niñez, infancia y adolescencia, donde su padre les hizo falta, donde lo veían poco porque siempre buscaba en donde trabajar. Entiende porqué su hermano mayor concurría a las actividades del colegio, pensando algunos compañeros que era su padre. Entiende que todo fue difícil para su padre, porque anda cabizbajo en algunas ocasiones, señala que el daño psicológico fue grande y por lo mismo espera una reparación digna, para que de alguna forma haya justicia.

Testimonio de don Emiliano Gonzalo Mancilla Vargas.

Indica que nació el 31 de octubre de 1971, de actuales 51 años y que vive en la ciudad de Puerto Montt. Indica que cuando tomaron detenido a su padre, él tenía alrededor de tres años, que no recuerda mucho, pero sabe que pasaron momentos difíciles, afectando su nivel económico y emocional. Comenta que vio muchas veces a



su madre llorar, y que no entendía porqué ella salía todos los días dejándolos con su abuelita, sin entender porqué su padre tampoco estaba.

Dispone que cuando fue más grande le conversaron sobre el tema, contándole que su padre estuvo detenido diez días, desde el 14 de diciembre de 1974 hasta el 23 de diciembre de 1974, haciéndole sentido todos los recuerdos que tenía. Relata que a los 18 años hizo el servicio militar, catalogándose como un buen soldado, dándole la opción de seguir para hacer una carrera. Indica que tenía todas las ganas para continuar, sin embargo, lo discriminaron por los antecedentes de su padre, afectándole la situación, sintiendo frustración de no continuar una carrera. Señala que comenzó a trabajar como guardia de seguridad, empleo que mantiene hasta el presente.

Refiere que le diagnosticaron depresión severa, trastorno del sueño, por lo que asistió a sesiones con un psicólogo por aproximadamente un año. Comenta que actualmente tiene hijos, nietos y que nunca ha comentado sus sentimientos respecto del tema, reprimiéndolos para no preocupar ni hacer daño, pero que considera algo que lo tiene marcado.

Espera que se haga justicia por todo el proceso que tuvieron que pasar sus padres, los que fueron finalmente afectados, debiendo guardar los sentimientos para no involucrar a nadie, por lo que espera una reparación digna para un mejor pasar.

El derecho.

En cuanto al derecho, expone que los hechos relatados se encuadran en crímenes de lesa humanidad, y que la responsabilidad del Estado está originada desde la Constitución Política de la República, conforme el artículo 38 y en conjunto con los artículos 6 y 7, que a su vez establecen los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, respectivamente, y que conforman el estatuto de responsabilidad extracontractual del Estado.

Respecto a la responsabilidad del Estado en la esfera del Derecho Internacional, afirma que en materia de Derechos Humanos los Estados tienen una obligación de resultado, que es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales. De allí que es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente.

Sobre la improcedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por lesa humanidad, transcribe el razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago al respecto.

Por otro lado, sobre la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en materia de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, señala que si bien es



efectivo que en ninguna disposición de la Convención Americana se expresa la imprescriptibilidad de las acciones civiles, la ausencia de regulación impone al juez la tarea de interpretar, o más bien, integrar la normativa existente con los correspondientes principios generales del Derecho, como se ha reconocido por la Excelentísima Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así las cosas, enfatiza que resulta imposible abstraerse del hecho de que toda violación a un derecho humano al interior del sistema interamericano, del cual, Chile, es parte, trae aparejada la obligación de reparar el mal causado, tratándose de una obligación compleja e indisoluble constituida por el deber de investigar los hechos, sancionar a los responsables, y reparar a las víctimas.

Previo a citar jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema sobre casos de responsabilidad del Estado por delito de lesa humanidad, expone respecto a la existencia del daño o lesión, la causalidad ya acreditada y el daño provocado y monto de la indemnización, indicando que existe un daño de carácter moral expresado en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia, como lo ha sostenido la jurisprudencia nacional e internacional que transcribe.

Refiere que por lo mencionado y la complejidad que conlleva solicitar un determinado monto a fin de que haga las veces de reparación integral del mal causado, al ser un daño irreparable que destruyó la vida personal y generó dolor físico y psicológico, solicita la suma de \$200.000.000 para el demandante principal y la suma de \$100.000.000 para cada demandante por repercusión o rebote, cifra que no sería antojadiza, y que se basaría en la jurisprudencia actual, como en la magnitud del daño, el que ha quedado manifestado en la demanda y que se acreditará en la etapa procesal pertinente.

Finalmente, en virtud de lo expuesto, previa citas legales, solicitan tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por don Raúl Letelier Wartenberg, ya individualizado, acogerla a tramitación, y en definitiva, condenar a la demandada al pago de \$200.000.000, a don Emiliano Segundo Mancilla España, además de la suma de \$100.000.000, a doña Olga Bernardita Vargas Soto; don Marcelo Alejandro Mancilla Vargas; don Joaquín Nelson Mancilla Vargas; doña Elena Bernardita Mancilla Vargas; y don Emiliano Gonzalo Mancilla Vargas, por concepto de daño moral o la suma que determine el Tribunal, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo al IPC, desde la fecha de interposición de la demanda y hasta el pago efectivo, junto con intereses legales, además de las costas de la causa, lo que significa un monto total de \$700.000.000;

SEGUNDO: Que, con fecha 13 de octubre de 2023, folio 09, comparece doña Carolina Cecilia Vásquez Rojas, abogada procurador fiscal, en representación



del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, quien viene en contestar la demanda, en base a los argumentos que expone en su presentación.

Excepciones, defensas y alegaciones.

Controversia de los hechos respecto de la cónyuge e hijos del demandante principal.

Dispone que la cónyuge e hijos del demandante principal comparecen a título personal invocando un daño moral propio, en calidad de víctimas de violaciones de derechos humanos, sin haber sido reconocidos en la comisión Valech I o II, por lo que controvierte la totalidad de los hechos en que se funda la demanda respecto de ellos.

Falta de legitimidad de doña Olga Bernardita Vargas Soto, en su calidad de cónyuge del demandante principal y sus hijos en común.

Sostiene que al no figurar como víctimas de prisión política y tortura, carecen de legitimación activa para presentar la demanda. Piensa que el daño para ser indemnizado debe ser personal, actual, real y cierto, lo que permite demandar solo a quienes lo hayan sufrido. Cree que los hechos relatados no pueden considerarse englobados en ninguno de los casos en que la doctrina y la jurisprudencia han planteado como daño reflejo, que sería la muerte o la incapacidad.

Piensa que extender el daño por repercusión a extremos tales como los descritos en la demanda, ocurridos hace décadas, donde la víctima directa y titular de la acción comparece demandando indemnización, genera un injusto que afecta la legitimidad del interés protegido con la responsabilidad civil, y por ello estima que la acción debiese ser rechazada.

En subsidio, improcedencia de las indemnizaciones demandadas por la cónyuge e hijos del actor principal, por limitación de la justicia transicional, además de haber sido reparados.

Afirma que la indemnización solicitada se desenvuelve en el marco de infracciones a los derechos humanos, que se daría en el ámbito de la justicia transicional. Señala que ha de entenderse qué proporción de los recursos públicos deberá ser destinado a reparación de las víctimas, y que la Ley N° 19.992, ha constituido un esfuerzo trascendental de reparación, para entender la necesidad de reparar a las víctimas, sin desfinanciar la caja fiscal, permitiendo que numerosas víctimas obtengan reparación monetaria. Menciona a modo ejemplar montos por pensiones, bonos, desahucio, bonos extraordinarios, que se han entregado. También cita al respecto la Ley N° 20.874, que establecería un aporte de reparación para las víctimas y sus viudas.

Piensa que siendo los recursos escasos, debe haber un límite que ponga fin a la línea de extensión reparativa. Sostiene que la pretensión económica es improcedente



porque existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a los parientes, siendo titulares de la acción de reparación los afectados directos del daño.

Los demandantes han obtenido otras formas de reparación.

Determina que el hecho que los actores no hayan tenido derecho a un pago de dinero, no significa que no hayan tenido reparación por daño. Señala que siendo un daño extrapatrimonial, su compensación no se desenvuelve en un aspecto puramente económico, sino que de otras prestaciones, como los programas de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas. Cree que la doctrina en la materia, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene carácter satisfactorio, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que permita atenuar sus efectos, haciéndolos soportables. Señala que las reparaciones se orientaron en una línea distinta a la meramente económica, nombrando como ejemplos: la construcción del memorial en el Cementerio General de Santiago de 1993; la designación del Día Nacional del detenido desaparecido; la construcción del Museo de la Memoria y Derechos Humanos; el Premio Nacional de Derechos Humanos; entre otros memoriales y obras.

Afirma que los órganos internacionales han valorado positivamente la política de reparación desarrollada en Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria. Ante lo expuesto, encontrándose la acción basada en los mismos hechos y pretendiéndose indemnizar los mismos daños, es que opone formalmente la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizados los demandantes, en sus calidades de hijos y cónyuge del actor principal. Cita al respecto dos fallos de la Excma. Corte Suprema, a saber, rol 473-2001, y rol 4742-2012.

Cree que el rechazo a nuevas peticiones de indemnización fortalece el programa de justicia transicional. Afirma que lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a una indemnización, genera un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa.

Excepción de reparación integral.

Comenta que no resulta posible comprender el régimen jurídico de reparaciones por derechos humanos, si no se posicionan en el programa jurídico nacional e internacional. Sostiene que las transiciones son medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego. Señala que las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que existe una compleja decisión de mover recursos públicos.

En cuanto a la complejidad reparatoria, explica que la Comisión Rettig, propuso en su informe final una serie de propuestas de reparación, como una pensión única de reparación y algunas prestaciones de salud. Indica que una vez establecida la



idea reparatoria, se han establecido distintos mecanismos concretando una compensación, como reparaciones a través de transferencia de dinero; asignación de derechos sobre prestaciones estatales; y reparaciones simbólicas.

Respecto de las transferencias directas de dinero, menciona que diversas leyes han establecido este tipo de reparaciones para las víctimas de apremios ilegítimos, desembolsando el Estado la suma de \$992.084.910.400, a diciembre de 2019. Cree que una pensión mensual es también una forma reparar el perjuicio actual. Estima que para el áalculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades.

En cuanto a las reparaciones específicas, menciona que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N° 19.992 y sus modificaciones.

Luego y en cuanto a las reparaciones mediante asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, explica que se concedió a los beneficiarios de la Ley N° 19.234, como de la Ley N° 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (Prais), ofreciéndose asimismo el apoyo técnico y de rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura. Adicionalmente, esgrime que se incluyeron entre dichos beneficios, aquellos de carácter educacional, consistentes en la continuidad y gratuidad de los estudios básicos, medios y superiores, ello a cargo de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, además de haberse concedido beneficios en vivienda.

Comenta que las reparaciones simbólicas pretenden reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor, sino entregando una satisfacción a las víctimas que logre en parte reparar el dolor, la tristeza y con ello, reducir el daño moral. Se remite a las medidas mencionadas precedentemente.

Cree que de todo lo expresado puede concluir que el Estado ha cumplido con los estándares internacionales de justicia transicional, y han provisto indemnizaciones acordes a la realidad económica. Señala que encontrándose las acciones interpuestas basadas en los mismos hechos y pretendiéndose indemnizar los mismos daños, es que se opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada.

En subsidio, excepción de prescripción.

Primeramente, señala que las acciones de los familiares de víctimas no son causadas directamente por crímenes de lesa humanidad, por lo que son prescriptibles. Considera menester señalar que quien sufrió la violación de derechos humanos fue la víctima directa, no sus hijos, ni su cónyuge, resultando incuestionable aplicar la institución de la prescripción. Cita al respecto, el fallo rol 84760-2016 de la Excma. Corte Suprema.



Interpone expresamente la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo al artículo 2332 del Código Civil, en relación el artículo 2497 del mismo cuerpo legal.

Señala que los demandantes han relatado que la detención ocurrió durante 7 días, desde el 14 de diciembre de 1974 en Puerto Montt. Menciona que encontrándose suspendida la prescripción durante la dictadura militar, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda, habría transcurrido en exceso el plazo de prescripción de cuatro años del artículo 2332 recién citado.

En subsidio, indica que en caso que se estime que la norma anterior no sea aplicable, interpone excepción de prescripción extintiva de cinco años, contemplada en los artículos 2515, en relación con el artículo 2514, ambos del Código Civil.

Considera que imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre una declaración explícita. Señala que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista texto legal expreso, llevaría a situaciones graves. Recuerda que la institución de la prescripción es universal y de orden público.

Piensa que el artículo 2497 del Código Civil, consagra el carácter obligatorio de que la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público.

Estima que la prescripción tiene como fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida. Piensa que esta institución no exime de responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización, sino solo ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca la acción. Cita al respecto el fallo rol 10665-2011 de la Excm. Corte Suprema.

En cuanto a los tratados internacionales, esgrime que no existe ninguna norma que declare imprescriptible la responsabilidad civil. Luego, dispone que no existiendo ninguna norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse a estos casos, debe recurrirse al derecho común, específicamente al artículo 2332 del Código Civil.

Respecto del contenido patrimonial de la acción indemnizatoria, comenta que cualquiera sea su origen no tiene un carácter sancionatorio, de modo que no puede cumplir un rol punitivo, y que desde allí que no parezca extraño que la acción pueda extinguirse por prescripción. Esgrime que el derecho a indemnización puede ser objeto de disposición, por la renuncia o la transacción, por lo que no existiría fundamento para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción.

Afirma que aun cuando el actor formule alegaciones respecto de que la acción intentada sea imprescriptible, señala que ninguno de los instrumentos internacionales



contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de los delitos o crímenes de lesa humanidad. Sostiene lo anterior, citando el fallo rol 1133-2006 de la Excma. Corte Suprema.

En cuanto al daño e indemnización reclamada.

Señala que se controvierten los hechos y las circunstancias jurídicas indicadas en la demanda, por lo que los actores deberán acreditar las circunstancias fácticas de los daños pretendidos, su existencia y vínculo de causalidad. Comenta que los hijos del demandante principal, srs. Marcelo Alejandro, Joaquín Nelson, Elena Bernardita y Emiliano Gonzalo, todos de apellidos Mancilla Vargas, nacieron años después de los hechos denunciados, así como también la sra. Vargas Soto, quien contrajo matrimonio con posterioridad, con lo que se diluiría el vínculo de causalidad entre el hecho base y el daño. Sostiene que en caso de acogerse la indemnización de los hijos del demandante principal, ésta no podría ser la misma para la víctima directa de prisión y tortura.

En cuanto al daño moral, hace presente que no puede dejar de considerarse que esa lesión, son normalmente atributos inmateriales, por ende la indemnización puramente moral no se determinaría cuantificando, en términos económicos, sino otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño. Sostiene que no es dable advertir la capacidad económica del demandante o demandado como elemento para fijar la cuantía, ya que solo debe considerarse la extensión del daño, teniendo presente el principio de prudencia. Cita como ejemplo el Rol 6891-2013, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

En forma subsidiaria, señala que la regulación del daño moral debe considerar pagos ya recibidos por el Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales. Piensa que para la fijación del daño moral se deben considerar todos los pagos recibidos por los actores a través de los años por parte del Estado, conforme a las leyes N° 19.234; y N° 19.992.

Improcedencia en el pago de reajustes e intereses.

Sostiene que los reajustes solo pueden devengarse en el caso que la sentencia acoja la demanda y establezca la obligación, además de encontrarse firme o ejecutoriada. Dispone que sin ello, no hay ninguna obligación, por lo que no existiría suma que deba reajustarse.

En cuanto a los intereses, cita el artículo 1551 del Código Civil, disponiendo que el deudor no esta en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado en el cumplimiento de la sentencia.

Finalmente, solicita tener por contestada la demanda, y en definitiva, rechazar la acción, con costas, o en subsidio, rebajar sustancialmente los montos pretendidos;



TERCERO: Que, con fecha 20 de octubre de 2023, folio 13, comparece don Nicolás Alberto Leal Sepúlveda, abogado, en representación de la parte demandante, evacuando el trámite de la réplica en base a los argumentos señalados en su presentación.

Señala que la demandada realiza un reconocimiento respecto de los hechos en que se funda la presente demanda.

En cuanto a la excepción de reparación integral, expone que no resulta concordante con la Carta Fundamental, basarse en la Ley N° 19.123 y especialmente en la Ley N° 19.992 sobre prisioneros y torturados políticos, para decir que el daño moral ya está reparado, ya que son formas distintas de reparación y que las asume el Estado, sin importar en caso alguno la renuncia de una de las partes. Cree que lo anterior llevaría a la conclusión de que el Congreso de Chile estaría avocándose al conocimiento y resolución de una causa judicial pendiente, lo que es abiertamente inconstitucional, además de haber fijado el monto de reparación de forma unilateral y arbitraria por él.

En cuanto a la improcedencia de la excepción de prescripción extintiva, enfatiza que el estatuto legal aplicable al caso concreto, sobre la base de la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por el país y las normas vigentes no puede ser simplemente aquel aplicable a los negocios y relaciones jurídicas entre particulares.

Luego, indica que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, ha variado el criterio reconociendo el carácter de imprescriptible de las acciones reparatorias, y que ello es un hecho público y notorio que puede verse semanalmente en la sección de noticias del Poder Judicial.

Respecto al monto demandado, reitera que no hay dinero que supla el dolor experimentado por su mandante, y respecto a la procedencia del cobro del reajuste, indica que está ligada a la garantía de la reparación integral o plena y del pago efectivo de las obligaciones.

Respecto a la procedencia del cobro de reajustes, indica está ligada a la garantía de la reparación integral o plena, y del pago efectivo de las obligaciones, y la desvalorización monetaria es algo que afecta a cualquier tipo de indemnización, por lo cual, es necesario acudir a un índice de reajustabilidad como el IPC.

Finalmente, solicita tener por evacuado el trámite de la réplica;

CUARTO: Que, con fecha 03 de noviembre de 2023, folio 19, comparece doña Carolina Cecilia Vásquez Rojas, abogada procurador fiscal, en representación del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, evacuando el trámite de la réplica en base a los argumentos señalados en su presentación.



Indica que la totalidad de las argumentaciones expresadas en la contestación las da por reproducidas, distinguiendo las alegaciones respecto del demandante principal, su cónyuge y sus hijos. Luego, respecto de lo vertido en el escrito de réplica, señala que no se hace diferencia sobre la víctima directa y los que demandan daño por repercusión.

Controversia respecto de los demandantes que comparecen en calidad de cónyuge e hijos de la víctima.

Afirma que dichos actores no figuran como víctima en ninguno de los informes emitidos por la comisión Valech, por lo que, no teniendo dicha calidad, carecen de legitimación activa para demandar. Estima que el daño para ser indemnizado debe ser personal, actual, real y cierto, por lo que solo lo puede demandar quien lo ha sufrido. Comenta que sin perjuicio de otras reparaciones para los familiares de una víctima, los que, no obstante haber sido descartados del pago directo de dinero, se les consideró en diversos recursos de carácter simbólico y programas, especialmente de salud. Piensa que la pretensión económica es improcedente porque en la especie ya existe un sistema legal de reparación pecuniaria en que se excluyó a los parientes.

Enfatiza en la excepción de reparación satisfactoria opuesta respecto de don Emiliano Segundo Mancilla España. Cree que el daño moral ya ha sido indemnizado, por lo que procede dar lugar a la excepción, insistiendo en el esfuerzo realizado por el Estado de Chile para compensar el daño producido a las víctimas, en especial por las reparaciones recibidas.

En cuanto a la prescripción, reitera la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en el rol 10665-2011, en la que se concluiría que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescribirían en cuatro años, desde la perpetración del hecho. Esgrime que los tratados internacionales no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente de las normas de prescripción de la acción civil.

Da por expresamente reproducidos los fundamentos vertidos respecto del monto demandado, reajustes e intereses, enfatizando que en cualquier caso que exista condena al Fisco de Chile, las sumas no pueden ser las mismas para quien sufrió el daño y quien no lo sufrió directamente.

Finalmente, solicita tener por evacuado el trámite de la duplica;

QUINTO: Que, con fecha 08 de noviembre de 2023, folio 19, se tuvo por evacuado el trámite de duplica, dentro del término legal, acto seguido, se recibió la causa a prueba, estableciéndose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, allí señalados, resolución notificada a la parte demandante, por el estado diario, el día 21 de noviembre de 2023, folio 21; y a la parte demandada, por correo electrónico, el día 26 de junio de 2024, folio 28;



SEXTO: Que, con la finalidad de acreditar sus dichos, la parte demandante acompañó la siguiente prueba instrumental:

1.- Copia de escritura pública de fecha 28 de enero de 2023, otorgada ante la Notario Público de Santiago, doña Paula Lucía Méndez Gallardo, repertorio N° 313-2023, de mandato judicial de Emiliano Segundo Mancilla España y otros a don Nicolás Alberto Leal Sepúlveda y otros;

2.- Copia de nómina de personas reconocidas como víctimas de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, destacado el N° 4926;

3.- Certificado de matrimonio entre los contrayentes don Emiliano Segundo Mancilla España, y doña Olga Bernadita Vargas Soto, circunscripción de Puerto Montt, número inscripción 329, sin registro, del año 1975, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación;

4.- Certificado de nacimiento de don Marcelo Alejandro Mancilla Vargas, circunscripción de San Miguel, número inscripción 15, registro BR, del año 1977, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación;

5.- Certificado de nacimiento de don Joaquín Nelson Mancilla Vargas, circunscripción de Puerto Montt, número inscripción 189, registro E, del año 1978, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación;

6.- Certificado de nacimiento de don Elena Bernardita Mancilla Vargas, circunscripción de Puerto Montt, número inscripción 1669, registro S, del año 1982, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación;

7.- Certificado de nacimiento de don Emiliano Gonzalo Mancilla Vargas, circunscripción de Puerto Montt, número inscripción 398, sin registro, del año 1975, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación;

6.- Sentencia de fecha 10 de junio de 2014, pronunciada por la Excma. Corte Suprema en causa rol N° 5831-2013;

7.- Sentencia de fecha 06 de enero de 2014, pronunciada por la Excma. Corte Suprema en causa rol N° 2918-2013;

8.- Sentencia 29 de diciembre de 2015, pronunciada por la Excma. Corte Suprema en causa rol N° 22856-2015;

9.- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Caso Ordenes Guerra y otros vs Chile, de fecha 29 de noviembre de 2018;

10.- Sentencia de fecha 14 de septiembre de 2015, pronunciada por la Excma. Corte Suprema en causa rol N° 1092-2015;

11.- Informe de la comisión nacional sobre prisión política y tortura, de la página 01 a la 10;

12.- Copia de Capítulo V, Métodos de tortura: definiciones y testimonios, emitido por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura;



13.- Documento denominado Transgeneracional del daño, emitido por Freddy Silva G., Coordinador Equipo Especializado Prais, Servicio de Salud de Aconcagua, de fecha 16 de octubre de 2017;

14.- Copia de nómina de personas reconocidas como víctimas de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, destacado el N° 4926;

15.- Documento denominado norma técnica para la atención de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo de 1973-1990, emitido por el Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, división de prevención y control de enfermedades, Departamento de Salud Mental;

16.- Copia de expediente de preso político y/o torturado, de fecha 10 de abril de 2010, respecto de la víctima don Emiliano Segundo Mancilla España, emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos;

17.- Informe integral de daños, de fecha 16 de febrero de 2024, respecto de don Emiliano Segundo Mancilla España, emitido por doña Maite Uribe Cárdenas, psicóloga, Servicio de Salud de Reloncaví;

18.- Informe psicológico, respecto de don Marcelo Alejandro Mancilla Vargas, emitido por don Felipe Ignacio Elgueta Casanova, psicólogo;

19.- Informe psicológico, respecto de don Joaquín Nelson Mancilla Vargas, emitido por don Felipe Ignacio Elgueta Casanova, psicólogo;

20.- Informe psicológico, respecto de doña Elena Bernardita Mancilla Vargas, emitido por don Felipe Ignacio Elgueta Casanova, psicólogo;

21.- Informe psicológico, respecto de don Emiliano Gonzalo Mancilla Vargas, emitido por don Felipe Ignacio Elgueta Casanova, psicólogo;

22.- Informe psicológico, respecto de doña Olga Bernardita Vargas Soto, emitido por don Felipe Ignacio Elgueta Casanova, psicólogo;

23.- Certificado de título profesional N° 78433, de fecha 17 de mayo de 2023, respecto de don Felipe Ignacio Elgueta Casanova, emitido por la Universidad Autónoma de Chile;

SÉPTIMO: Que, la parte demandante, con fecha 22 de julio de 2024, folio 41, rindió prueba testimonial, compareciendo don **Felipe Ignacio Elgueta Casanova**, quién previa y legalmente juramentado e interrogado, al tenor del punto de prueba N° 1, esto es, fecha y circunstancias en que ocurrieron los hechos materia de autos, expone que: la detención del sr. Mancilla se produce el 14 de diciembre de 1974 en la vía pública de la ciudad de Puerto Montt, encontrándose incomunicado para conducirlo a una comisaría, donde constan los actos de violencia ejercidos en su contra, para luego trasladarlo a la cárcel Chin Chin en la cual permaneció en condiciones precarias de vida, por falta de alimentación y por experimentar



nuevamente hechos de violencia, siendo dejado en libertad el 23 de diciembre del mismo año.

Explica que lo anterior le consta porque realizó informes psicológicos al grupo familiar de la víctima, quienes además de ofrecer su relato, expusieron documentación relativa al periodo de detención.

Interrogado el testigo al punto de prueba N° 2, esto es, existencia de un acto atribuible al Estado de Chile, realizado por sus agentes, que hubiese ocasionado daños y perjuicios a los demandantes, expone que: puede afirmar que los demandantes se ven en un entorno conflictivo por el hostigamiento y persecución dirigida a los progenitores del grupo familiar. Evidencia que los hijos del sr. Mancilla desde etapas de la infancia, adolescencia y adultez, recurrieron a atención de salud mental con motivos de consulta por síntomas que no se explican, por una vivencia de la actualidad o por factores de riesgo ajenos a la vulneración. Señala en cuanto a la esposa del sr. Mancilla, que observa síntomas de problemas del sueño, inadaptación social, percepción negativa sobre el mundo, además de temor generalizado hacia el contenido audiovisual que aluda a la violencia. Indica que le consta lo anterior por los procesos de evaluación realizados al grupo, en conjunto a la exposición de sus atenciones en salud mental y farmacología para disminuir síntomas.

Interrogado el testigo al punto de prueba N° 3, esto es, si como consecuencia de los hechos descritos en autos, los demandantes experimentaron perjuicios. En su caso, naturaleza y monto de los mismos, expone que: menciona que puede evidenciar la sintomatología en el estado cognitivo de la sra. Vargas, relacionado con el estrés post traumático, que desde el manual de diagnóstico de DSM-V, tiene su origen por la vivencia de un individuo en una situación de violencia que escapa de la comprensión para enfrentar la situación, dando así estrés en años posteriores, donde surge por la inadaptación del comportamiento para resignificar el episodio traumático.

En cuanto al monto, indica que no puede afirmar una cifra exacta, ya que ello implica atención psicoterapéutica en conjunto a la posibilidad de recurrir en atención con especialistas, quienes determinar el uso de medicamentos. Dispone que ello le consta bajo su formación profesional como psicólogo clínico.

Al testigo se le exhiben los documentos acompañados en la presentación de fecha 03 de junio de 2024, folio 24, referidos a informes psicológicos, sobre los cuales reconoce su autoría y los ratifica;

OCTAVO: Que, con la finalidad de acreditar sus dichos, la parte demandada acompañó la siguiente prueba instrumental:

1.- Certificado emitido por el Consejo de Defensa del Estado, con fecha 06 de octubre de 2023, respecto de doña Carolina Vásquez Rojas, como abogada procuradora fiscal subrogante;



2.- Certificado emitido por el Consejo de Defensa del Estado, con fecha 25 de octubre de 2023, respecto de doña Carolina Vásquez Rojas, como abogada procuradora fiscal subrogante;

3.- Certificado de egreso emitido con fecha 15 de julio de 2024, por la Universidad Católica de Chile, respecto de doña Catalina Belén Rivas Jara;

4.- Publicación del Diario Oficial, de fecha 28 de diciembre de 2023, CVE: 2429378, con nombramiento de don Marcelo Eduardo Chandía Peña, como abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado;

5.- Resolución N° 45/4/2023, de fecha 16 de noviembre de 2023, emitida por el Consejo de Defensa del Estado, respecto del nombramiento de don Marcelo Eduardo Chandía Peña, como abogado procurador fiscal;

6.- Certificado de egreso de fecha 05 de mayo de 2022, emitido por la Universidad de Chile, respecto de doña María Elizabeth Núñez Riquelme;

7.- Ordinario: DSGT N° 4792-17397, de fecha 30 de octubre de 2023, emitido por el Instituto de Previsión Social, informando sobre beneficios de reparación de don Emiliano Segundo Mancilla España;

NOVENO: Que, el tribunal, a solicitud de la parte demandada ordenó la siguiente diligencia probatoria:

1.- Ordinario: DSGT N° 4792-17397, de fecha 30 de octubre de 2023, emitido por el Instituto de Previsión Social, informando sobre beneficios de reparación de don Emiliano Segundo Mancilla España, en su calidad de víctima de prisión política y tortura, Ley Valech. Dicha diligencia se encuentra acompañada a los autos con fecha 31 de octubre de 2023, folio 15;

DÉCIMO: Que, son hechos de la causa, por así encontrarse acreditados en el proceso, los siguientes:

1.- Que, don Emiliano Segundo Mancilla España, con fecha 14 de diciembre de 1974, fue detenido en la vía pública en la ciudad de Puerto Montt, por parte de militares en dirección a la Segunda Comisaría de Carabineros, para luego dirigirlo a la cárcel Chin Chin, permaneciendo privado de libertad hasta el día 23 de diciembre de 1974, donde fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes;

2.- Que, don Emiliano Segundo Mancilla España, se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech II, Registro N° 4926;

3.- Que, don Emiliano Segundo Mancilla España, ha obtenido los siguientes beneficios de reparación contemplados en: pensión Ley N° 19.992 por \$26.470.482, aporte único Ley N° 20.874 por \$1.000.000 y aguinaldos por \$470.667, lo que da un



total pagado de \$27.941.149, siendo la pensión actual de \$264.898, lo anterior, a la fecha de emisión del oficio respectivo el 30 de octubre de 2023;

4.- Que, don Emiliano Segundo Mancilla España y doña Olga Bernardita Vargas Soto, contrajeron matrimonio el día 11 de junio de 1975, en la ciudad de Puerto Montt;

5.- Que, don Emiliano Segundo Mancilla España y doña Olga Bernardita Vargas Soto, tienen cuatro hijos: don Marcelo Alejandro; don Joaquín Nelson; doña Elena Bernardita; y don Emiliano Gonzalo, todos de apellido Mancilla Vargas;

UNDÉCIMO: Que, como se adelantó, en estos autos se ha deducido acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual por don Emiliano Segundo Mancilla España, como víctima principal y directa, además por doña Olga Bernardita Vargas Soto; y por don Marcelo Alejandro; don Joaquín Nelson; doña Elena Bernardita; y don Emiliano Gonzalo, todos de apellido Mancilla Vargas, en calidad de cónyuge e hijos de la víctima principal y demandantes por repercusión, en contra del Fisco de Chile.

Lo anterior, en atención al daño sufrido producto de la detención y tortura realizada por agentes del Estado en contra del demandante principal, quien es reconocido como víctima de violación de Derechos Humanos, por la denominada comisión Valech II, solicitando una indemnización ascendente a \$200.000.000, para el sr. Mancilla España, y de \$100.000.000, para cada uno de los otros demandados, sra. Olga Bernardita Vargas Soto; y don Marcelo Alejandro; don Joaquín Nelson; doña Elena Bernardita; y don Emiliano Gonzalo, todos de apellido Mancilla Vargas, por concepto de daño moral o lo que el Tribunal determine.

Que, por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, contesta la demanda, solicitando su rechazo, en base a diversos argumentos, controvirtiendo los hechos respecto de los demandantes por repercusión, oponiendo excepción de falta de legitimación activa de los demandantes por repercusión, en subsidio, improcedencia de las indemnizaciones por limitación de la justicia transicional; alegando reparación satisfactiva respecto de los demandantes por repercusión; excepción de reparación integral por cuanto la parte demandante principal ha sido reparada mediante desagavios de carácter económico, simbólico y en programas; y, en subsidio, haber operado la prescripción de la acción, tanto de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil como de 5 años del artículo 2515 del mismo cuerpo de leyes. En subsidio, para el caso de acogerse la presente acción, solicita que el daño sea regulado teniendo en consideración los beneficios extrapatrimoniales ya recibidos del Estado;

DUODÉCIMO: Que, en cuanto a la excepción de falta de legitimación activa respecto de los demandantes por repercusión, por no ser víctimas directa de



crímenes de lesa humanidad, cabe señalar que: “para poder figurar y actuar eficazmente como parte, no ya en un proceso cualquiera, sino en uno determinado y específico, no basta con disponer de esta aptitud general de la capacidad o legitimatio ad processum, sino que es necesario además poseer una condición más precisa y referida en forma particularizada al proceso individual de que se trate. Tal condición que se denomina legitimatio ad causam o legitimación procesal afecta al proceso no en su dimensión común, sino en lo que tiene de individual y determinado. Más correcto es hablar como lo hace Carnelutti de legitimación para pretender o resistir la pretensión, o de legitimación para obtener sentencia de fondo o mérito. Pero creemos que lo mejor es mantener la denominación tan conocida y antigua de legitimatio ad causam o legitimación en la causa” (Cristian Maturana Miquel, “Disposiciones Comunes A Todo Procedimiento”, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, año 2009, pág. 45).

Luego, la legitimación procesal, legitimatio ad causam o legitimación en la causa, puede definirse como “la posición de un sujeto respecto al objeto litigioso, que le permite obtener una providencia eficaz” o como “la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto litigio, y en virtud de la cual, exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como parte en tal proceso” (Cristian Maturana Miquel, op. cit. Pág. 46).

De este modo, la legitimación en la causa para el demandante o legitimación activa, consiste “en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda” y respecto del demandado o legitimación pasiva, “en ser la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante... Es decir, el demandado debe ser la persona a quien conforme a la ley corresponde contradecir la pretensión del demandante o frente a la cual permite la ley que se declare la relación sustancial objeto de la demanda; y el demandante la persona que según la ley puede formular las pretensiones de la demanda, aunque el derecho sustancial pretendido por él no exista o corresponda a otra persona” (Cristian Maturana, op. cit., pág. 46).

Por consiguiente, carecen de legitimación activa o pasiva, quienes intervienen en un proceso sin reunir tales calidades.

Que, en el caso de autos, no debe obviarse que los demandantes Marcelo Alejandro Mancilla Vargas, Joaquín Nelson Mancilla Vargas, Elena Bernardita Mancilla Vargas, Emiliano Gonzalo Mancilla Vargas, y Olga Bernardita Vargas Soto, tienen un interés legítimo en su pretensión, desde que requieren la indemnización del



daño propio, sufrido a consecuencia de la detención y privación de libertad de su cónyuge y padre, y cómo esos hechos y vivencias, afectaron la vida familiar, lo que en todo caso es materia de prueba, motivos suficientes para rechazar la alegación de falta de legitimación activa, sin perjuicio de lo que se resuelva en cuanto al fondo de la acción;

DÉCIMO TERCERO: Que, en cuanto a la defensa opuesta en subsidio, por limitación de la justicia transicional, en razón de que existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a los parientes, siendo titulares de la acción de reparación los afectados directamente por el daño, no debe obviarse que los demandantes por repercusión Marcelo Alejandro Mancilla Vargas, Joaquín Nelson Mancilla Vargas, Elena Bernardita Mancilla Vargas, Emiliano Gonzalo Mancilla Vargas, y Olga Bernardita Vargas Soto, como se estableció en el considerando precedente, tiene un interés legítimo en su pretensión desde que requieren la indemnización del daño propio, sufrido a consecuencia de la detención y privación de libertad de su cónyuge y padre.

De esta forma, las reparaciones pecuniarias a las que hace referencia la demandada no resultan en modo alguno incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios -de considerarse que concurren los requisitos para ello-, más aún si la propia ley no establece dicha incompatibilidad para la reparación monetaria, de acuerdo al artículo 24 de la Ley N° 19.123, que crea una corporación nacional de reparación para y otros beneficios para las personas que indica, establece que: “La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes”.

Asimismo, respecto de la alegación en cuanto a que los demandantes por repercusión han obtenido otras formas de reparación satisfactoria, se hace presente que no siendo incompatible una reparación de carácter monetario con una indemnización de perjuicios, con mayor razón resulta compatible -a juicio de esta Magistrado- con una reparación meramente simbólica;

DÉCIMO CUARTO: Que, en cuanto a la denominada “excepción de reparación integral” que opone la demandada respecto del demandante principal sr. Emiliano Segundo Mancilla España, por haber sido resarcido el actor en conformidad a la Ley N° 19.123 y N° 19.980, cabe señalar que si bien consta en Ordinario DSGT N° 4792-17397, de 30 de octubre de 2023, del Instituto de Previsión Social, que el sr. Mancilla España, ha recibido beneficios concedidos en las Leyes N° 19.992 y 20.874, por un total de \$27.941.149 a la fecha -sin perjuicio de la pensión mensual que sigue percibiendo, ascendente a \$264.898-, lo cierto es que tales beneficios no son



incompatibles con las indemnizaciones que por esta vía se solicitan, como ya ha sido establecido reiteradamente por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia, debiendo remitirnos a lo razonado en el motivo anterior, en especial en el ya citado artículo 24 de la Ley N° 19.123, en lo relativo a las reparaciones meramente simbólicas;

DÉCIMO QUINTO: Que, por otra parte, la demandada alega la prescripción de la acción, de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo cuerpo de leyes.

Que, luego y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad o si, por el contrario, procede restringir la imprescriptibilidad sólo a las acciones penales, debiendo en consecuencia aplicarse a las acciones civiles la prescripción conforme la regulación del Derecho Privado.

Al efecto, ha de señalarse que en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de violación a los Derechos Humanos en crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas internas.

De otra parte, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso lesionaría valores fundamentales, desde el punto de vista jurídico como moral, toda vez que la aludida institución constituye un amparo para el ente estatal y, por lo mismo, su aplicación en el campo del Derecho Público importaría soslayar el deber del Estado de cumplir sus fines propios, dejando en el desamparo a las personas, lo que se traduce en una negación de sus Derechos Fundamentales, tales como la vida e integridad física, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.

Luego, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, sin que obste a ello el fallo aludido por la demandada en apoyo a su defensa, relativo al recurso de casación en el fondo conocido por el Tribunal Pleno de nuestra Excm. Corte Suprema, en conformidad al artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, pues no debe obviarse el efecto relativo de las sentencias y el hecho que, en materias tan sensibles como ésta, la jurisprudencia se torna dinámica, como se ha podido constatar en los últimos años.



Así, en diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, se ha razonado que “... en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos verificados, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales, se debe concluir no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción por el transcurso del tiempo de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada de los delitos que se han tenido por acreditados. Tratándose de delitos como los que aquí se han investigado, que merecen la calificación ya señalada, si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por el ordenamiento internacional sobre Derechos Humanos -integrante del sistema jurídico nacional por disposición del artículo 5° de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito” (Sentencia de Reemplazo Rol ICS 5831-2013).

Todas estas reflexiones conducen al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por la demandada;

DÉCIMO SEXTO: Que, descartadas las alegaciones previas de la demandada, en relación con la pretensión de los actores, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada.

Que, como fue establecido en el motivo décimo, don Emiliano Segundo Mancilla España, con fecha 14 de diciembre de 1974, fue detenido en la vía pública en la ciudad de Puerto Montt, por parte de militares en dirección a la Segunda Comisaría de Carabineros, siendo dirigirlo a la cárcel Chin Chin, permaneciendo privado de libertad hasta el día 23 de diciembre de 1974, donde fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes;

Que, por lo anterior, el actor fue calificado como víctima del listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech II, ello de acuerdo con la prueba rendida en autos, apreciada en forma legal.

Que, estos hechos, conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención y tortura de don Emiliano Segundo Mancilla España.

En efecto, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.



Por su parte, la Constitución Política de la República de 1925, garantizaba a todos los habitantes de la República la libertad, al regular en sus artículos un estatuto de derechos de las personas, deberes de las autoridades y requisitos para proceder a la privación de ella.

En el Acta Constitucional de la Junta de Gobierno, DL N° 1 de 11 de septiembre de 1973, en su primera consideración se expone: “La fuerza Pública formada constitucionalmente por el Ejército, la Armada y el Cuerpo de Carabineros representa la organización que el Estado se ha dado para el resguardo y defensa de su integridad física y moral; y de su identidad histórico cultural...”; “... su misión suprema es la de asegurar por sobre toda otra consideración la supervivencia de dichas realidades y valores, que son los superiores y permanentes de la nacionalidad chilena.”

El artículo 4 del DL N° 5, publicado el 22 de septiembre de 1973, sanciona a quienes cometieren atentados contra la vida e integridad física de las personas, con el propósito de alterar la seguridad interna o intimidar a la población o procedan a su encierro o detención.

Luego, tratándose en la especie de una violación a los Derechos Humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los Derechos Humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los Derechos Humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún Órgano del Estado puede desconocerlos, por el contrario debe respetarlos y promoverlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como el Convenio de Ginebra de 1949, que establece el deber de los Estados parte de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario;

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, establecida la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del daño que reclaman los demandantes.

Ha de señalarse que para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, y pese a la particular naturaleza del daño moral, éste debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.

Así la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o



afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, a consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

“El daño moral consiste en la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio” (José Luis Díez Schwerter. El daño extracontractual. Editorial jurídica de Chile, pág. 88);

DÉCIMO OCTAVO: Que, en orden a acreditar su existencia y evaluación, la parte demandante rindió prueba documental que da cuenta la situación psicológica que los demandantes presentan hoy en día, más los certificados de matrimonio y de nacimiento respectivos.

En las conclusiones del informe integral de daños respecto del demandante principal don Emiliano Segundo Mancilla España, realizado por el Programa de Reparación y Atención de Salud, de Reloncaví, con fecha 16 de febrero de 2024, se consigna en lo pertinente que: “a nivel psicológico, don Emiliano exhibe una sintomatología depresiva, evidenciada por la labilidad emocional, anhedonia y desmotivación. El trauma de su detención se manifiesta en insomnio, pesadillas y episodios de terror nocturno, condiciones clínicas compatibles con cuadro de trastorno por estrés postraumático... a nivel laboral, la violencia política obstaculizó su progreso profesional y económico. Los rechazos laborales basados en su historial político lo llevaron a trabajar de manera independiente, generando inestabilidad financiera y limitando sus oportunidades de empleo estable... el aislamiento social que se configuró en la vida de don Emiliano y su familia, potenciado por hipervigilancia en relación a su medio, estableció consecuencias tangibles en relación a su rol social, dejó de asistir a actividades sociales a las que solía ser invitado, junto a que su permanencia era breve debido al temor e inseguridad que experimentaba...”.

En cuanto al informe psicológico emitido respecto de don Marcelo Alejandro Mancilla Vargas, se dispone en su parte final, entre otras conclusiones, que: “posee síntomas asociados al Trastorno depresivo persistente según DSM-V y Trauma Psicosocial según Martin-Baro, relacionado a las etapas traumáticas vivenciadas por su padre dadas por interrogatorios, amenazas de muerte y tortura en 1974, también las propias en medida que desarrolló su rutina, experimentando diversidad de situaciones



estresantes a lo largo de su vida que determinarían otras condicionantes a su estado mental en la actualidad. Siendo una víctima indirecta de la carga psicológica promovida por estos episodios que afectarían también a las dinámicas familiares. Por último, relativo a las dificultades socioeconómicas por las que transitaron por largos años vinculado a los antecedentes penales”.

Por su parte, el informe psicológico de don Joaquín Nelson Mancilla Vargas, dispone en su parte conclusiva que: “posee síntomas asociados al Trauma Psicosocial según Martin-Baro, relacionado a las etapas traumáticas vivenciadas por su padre dadas por interrogatorios, amenazas de muerte y tortura en 1974, también las propias en medidas que desarrolló su rutina, experimentando diversidad de situaciones estresantes a lo largo de su vida que determinarían otras condicionantes a su estado mental en la actualidad. Siendo una víctima indirecta de la carga psicológica promovida por estos episodios que afectarían también a las dinámicas familiares. Por último, relativo a las dificultades socioeconómicas por las que transitaron por largos años vinculado a los antecedentes penales”.

En cuanto al informe psicológico de doña Elena Bernardita Mancilla Vargas, se determina en su parte final que: “actualmente posee síntomas asociados al Trauma Psicosocial según Martin-Baro, relacionado a las etapas traumáticas vivenciadas por su padre dadas por interrogatorios, amenazas de muerte y tortura en 1974, también las propias en medidas que desarrolló su rutina, experimentando diversidad de situaciones estresantes a lo largo de su vida que determinarían otras condicionantes a su estado mental en la actualidad. Siendo una víctima indirecta de la carga psicológica promovida por estos episodios que afectarían también a las dinámicas familiares. Por último, relativo a las dificultades socioeconómicas por las que transitaron por largos años vinculado a los antecedentes penales”.

En cuanto a don Emiliano Gonzalo Mancilla Vargas, su informe psicológico determina en su parte conclusiva, entre otras aseveraciones, que: actualmente posee síntomas asociados al Trauma Psicosocial según Martin-Baro, relacionado a las etapas traumáticas vivenciadas por su padre dadas por interrogatorios, amenazas de muerte y tortura en 1974, también las propias en medidas que desarrolló su rutina, experimentando diversidad de situaciones estresantes a lo largo de su vida que determinarían otras condicionantes a su estado mental en la actualidad. Siendo una víctima indirecta de la carga psicológica promovida por estos episodios que afectarían también a las dinámicas familiares. Por último, relativo a las dificultades socioeconómicas por las que transitaron por largos años vinculado a los antecedentes penales”.

Finalmente, respecto de doña Olga Bernardita Vargas Soto, su informe psicológico indica que: “actualmente posee síntomas asociados al Trauma Psicosocial



según Martin-Baro, relacionado a las etapas traumáticas vivenciadas por su esposo dadas por interrogatorios, amenazas de muerte y tortura en 1974, también las propias en medidas que desarrollo su rutina, experimentando diversidad de situaciones estresantes a lo largo de su vida que determinarían otras condicionantes a su estado mental en la actualidad. Siendo una víctima indirecta de la carga psicológica promovida por estos episodios que afectarían también a las dinámicas familiares. Por último, relativo a las dificultades socioeconómicas por las que transitaron por largos años vinculado a los antecedentes penales”;

DÉCIMO NOVENO: Que, de esta forma, atendido los antecedentes incorporados en el proceso, no resulta posible acreditar el daño moral sufrido por los demandantes por repercusión: don Marcelo Alejandro Mancilla Vargas; don Joaquín Nelson Mancilla Vargas; doña Elena Bernardita Mancilla Vargas; don Emiliano Gonzalo Mancilla Vargas; y doña Olga Bernardita Vargas Soto, toda vez que la única prueba tendiente a acreditar los perjuicios alegados, corresponde a informes psicológicos elaborados por un psicólogo particular, los que, sin perjuicio de haberse reconocido en la audiencia testimonial de fecha 22 de julio de 2024, folio 41, siguen teniendo la naturaleza de un instrumento privado, los que deben ser valorados de conformidad al numeral 3° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1702 del Código Civil. Adicionalmente, resulta pertinente señalar que todos los informes determinan casi idénticas conclusiones, en circunstancias de que todos los examinados corresponden a personas con características y personalidades distintas.

Si bien los certificados de matrimonio y nacimiento incorporados al proceso, respecto de los demandantes por daño por repercusión, permiten inferir el vínculo de parentesco que hay entre ellos y su padre, don Emiliano Segundo Mancilla España, no fue aportada prueba adicional tendiente a acreditar que la detención y tortura sufrida por este último, haya generado efectivamente daño moral a sus familiares, como también otros aspectos que se alegan, como la discriminación, precariedad, represión, la salud, la falta de estudios técnicos o profesionales, entre otros, sin que sea posible suponer que todo ello ocurrió como una consecuencia irrefutablemente directa de la detención y tortura sufrida por la víctima, así como tampoco el dolor o el menoscabo de condiciones personales, psíquicas, morales o de afecto que se han alegado.

Que, en consecuencia, no habiendo rendido prueba idónea que permita acreditar el daño moral alegado por los demandantes, siendo de su cargo, deberá desestimarse la demanda respecto de ellos;

VIGÉSIMO: Que, respecto del demandante principal don Emiliano Segundo Mancilla España, habiéndose acreditado el daño moral y no pudiendo obviarse que la



privación de libertad y ser víctima de tortura, en el contexto que se ha reseñado, conlleva una afección importante a cualquier persona, resultando difícil de calcular y cuantificar, el Tribunal lo regulará prudencialmente en la cantidad total de ocho millones de pesos (\$8.000.000), reiterando lo ya referido en las motivaciones precedentes y haciendo presente que si bien la privación de libertad por motivos políticos y sin causa justificada constituye de por sí una grave violación a los Derechos Humanos, en este caso aquella se prolongó, a saber, aproximadamente por nueve días, lo que importa un menoscabo a los Derechos Fundamentales de todo ser humano, y que se condice igualmente con las indemnizaciones fijadas por esta juez en casos análogos;

VIGÉSIMO PRIMERO: Que al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer la demandada, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor desde que la misma quede ejecutoriada y con intereses desde que se constituya en mora al deudor;

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida y estimando esta magistrado que la demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y, de conformidad, con lo que establecen los artículos 47, y siguientes, 222 y, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código Civil; Constitución Política de la República; Convención Americana de Derecho Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, se resuelve:

I.- Que **se rechazan** las excepciones de falta de legitimación activa, limitación de la justicia transicional y reparación satisfactiva de los demandantes por repercusión, reparación integral y prescripción deducidas por la demandada;

II.- Que, **se rechaza** la demanda de lo principal de fecha 07 de julio de 2023, folio 01, respecto a la indemnización de perjuicios por daño moral pretendida por los demandantes don Marcelo Alejandro Mancilla Vargas; don Joaquín Nelson Mancilla Vargas; doña Elena Bernardita Mancilla Vargas; don Emiliano Gonzalo Mancilla Vargas; y doña Olga Bernardita Vargas Soto;

III.- Que **se acoge, parcialmente**, la demanda de lo principal de 07 de julio de 2023, folio 01 y, en consecuencia, **se condena al Fisco de Chile** a pagar a título de daño moral, la suma de ocho millones de pesos (\$8.000.000), a favor del demandante don Emiliano Segundo Mancilla España, con más los reajustes e intereses consignados en el fundamento vigésimo primero precedente;

IV.- Que **se exime de pago** de las costas a la demandada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.



C-11430-2023

Foja: 1

Consúltese si no se apelaré.

C-11430-2023

Pronunciada por doña **Soledad Araneda Undurraga**, Juez Titular.

Autoriza doña **Ximena del Pilar Andrade Hormazábal**, Secretaria Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. En **Santiago, dos de septiembre de dos mil veinticuatro.-**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UJKUXPKYQPS